



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

Delito de trata de personas y el consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogado

AUTOR:

Br. Fiestas Alache, Joseph Jimmynton (ORCID: 0000-0002-3354-8350)

ASESOR:

Dr. Jurado Fernández, Cristian Augusto (ORCID: 0000-0001-9464-8999)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Constitucional

PIURA – PERÚ

2020

Dedicatoria

A mis padres y hermana, por su incondicional
sacrificio y esfuerzo por verme crecer y
superarme cada día, enfrentando y luchando en
la vida por un futuro mejor.

A mi querida abuela Bertha y tíos, quienes me
ayudaron a forjar mis ideas y no decaer en el
cumplimiento de mis ideales.

A los compañeros caídos y aún de pie, que con
su desinterés y ejemplo de vida me enseñaron
a bregar por una mejor sociedad.

Joseph Jimmynton

Agradecimiento

A mis docentes y asesores que me guiaron en la comprensión de un vasto conocimiento y también me encaminaron en valores durante el curso de mi etapa universitaria.

Agradezco a los magistrados que me permitieron aprender y ser parte del rol que cumplen en los grandes asuntos de la Nación, en salvaguardar la convivencia social y en tutelar los derechos de todos los ciudadanos que piden justicia.

Joseph Jimmynton

Página del jurado

Declaratoria de autenticidad

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Joseph Jimmynton Fiestas Alache, identificado con DNI N° 44582706, egresado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Piura, declaro que el trabajo académico titulado: **"Delito de trata de personas y el consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes"**; presentado para la obtención del título profesional de Abogado, es de mi autoría.

Por tanto, declaro lo siguiente:

1. He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda la cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.
2. No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en el presente trabajo.
3. Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.
5. De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Piura, 20 de mayo del 2020



Joseph Jimmynton Fiestas Alache

DNI N° 44582706

Índice

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Página del jurado	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice	vi
Índice de tablas	vii
Índice de gráficos	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MÉTODO	15
2.1. Tipo y diseño de investigación	15
2.2. Operacionalización de variables	15
2.3. Población, muestra y muestreo	19
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	19
2.5. Procedimiento	19
2.6. Método de análisis de datos	20
2.7. Aspectos éticos	20
III. RESULTADOS	21
IV. DISCUSIÓN	30
V. CONCLUSIONES	34
VI. RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS.....	36
ANEXOS	39

Índice de tablas

Tabla 1. Operacionalización de las variables	17
Tabla 2. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñado esta actividad?	21
Tabla 3. Nacionalidad de las meretrices	22
Tabla 4. ¿Bajo qué condición se dedican a esta actividad?	23
Tabla 5. ¿Estaría dispuesta a denunciar algún caso sobre explotación?	24
Tabla 6. ¿Considera que la prostitución debe de reconocerse como un trabajo social?	25
Tabla 7. ¿La institución tiene registradas denuncias sobre el delito de trata de personas? ..	26
Tabla 8. ¿Considera que el término: “consentimiento de la víctima adulta” debe ser suprimido de la definición del delito de trata de personas?	27
Tabla 9. ¿Las instituciones gubernamentales cuentan con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas?	28
Tabla 10. ¿Existe algún protocolo a seguir para las personas rescatadas por el delito de trata de personas asegurando su seguridad y condiciones de vida?	29
Tabla 11. matriz de consistencia lógica	40
Tabla 12. Matriz de consistencia metodológica	41

Índice de gráficos

Gráfico 1. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñado esta actividad?	21
Gráfico 2. Nacionalidad de las meretrices	22
Gráfica 3. ¿Bajo qué condición se dedican a esta actividad?	23
Gráfico 4. ¿Estaría dispuesta a denunciar algún caso sobre explotación?	24
Gráfico 5. ¿Considera que la prostitución debe de reconocerse como un trabajo social? ...	25
Gráfico 6. ¿La institución tiene registradas denuncias sobre el delito de trata de personas?	26
Gráfico 7. ¿Considera que el término: “consentimiento de la víctima adulta” debe ser suprimido de la definición del delito de trata de personas?	27
Gráfico 8. ¿Las instituciones gubernamentales cuentan con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas?	28
Gráfico 9. ¿Existe algún protocolo a seguir para las personas rescatadas por el delito de trata de personas asegurando su seguridad y condiciones de vida?	29

Resumen

La presente investigación titulada: “Delito de trata de personas y el consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes”; es una investigación que tiene como objetivo general: establecer si el consentimiento de la víctima mayor de edad migrante es causa de exoneración de la responsabilidad penal en el tipo penal de trata de personas dentro del Código Penal Peruano el cual es consistente con el carácter de bien jurídico no disponible de la dignidad humana, bien jurídico tutelado en el delito de trata de personas. Así mismo el tipo de investigación desarrollada es descriptiva bajo un diseño no experimental; los resultados nos muestran una problemática muy grande y diversa de poder atender. La conclusión a la cual se arriba en el estudio enfatiza que es necesaria la modificación del Código Penal Peruano; en contenido de sus artículos 153° y 153° - A; suprimiendo el término: “consentimiento de la víctima adulta”; como causal de atenuante de la tipicidad de la comisión del delito de trata de personas. Así mismo podría consignarse que la norma debe sancionar de forma igualitaria al individuo que convenga publicidad por cualquiera de los medios de comunicación, tan igual como a la persona que publicite anuncios que favorezcan el desarrollo del ilícito en referencia a la trata de personas.

Palabras Claves: Delito de trata de personas, consentimiento de las víctimas, mujeres migrantes.

Abstract

The present titled investigation: "Offense of dealing with persons and the consent of the victims in migrant women"; is an investigation that has as its general objective: to establish if the consent of the victim mayor of migrant age is cause of exoneration of criminal responsibility in the criminal type of treatment of persons within the Peruvian Legal Code which is consistent with the character of good legal in the availability of human dignity, legal protection under the crime of dealing with personas. Asism of the type of investigation developed is descriptive under a design in the experimental; the results show us a very big and diverse problem to be able to attend. The conclusion to which the study takes place emphasizes that it would be necessary to modify the Peruvian Penal Code; contained in its article 153 ° and 153 ° - A; deleting the term: "consent of the adult victim"; as a cause of mitigation of the typicality of the commission of the crime of dealing with personas. Likewise, it could be stated that the standard must equally sanction individuals who convince publicity by any means of communication; as well as the person who advertises ads that favor the illegal development of the persona.

Keywords: Persona offense, consent of the victims, migrant women.

I. INTRODUCCIÓN

Un delito de alcance mundial es la trata de personas; este delito vulnera la dignidad, la libertad y la integridad de las personas; ya que implica la explotación de la víctima que es vista como un objeto. Incluso en los países más desarrollados del mundo contemporáneo se advierte que en muchas ocasiones se producen violaciones a los derechos humanos; las cifras registradas son altas; lo cual permite afirmar que aún en pleno siglo de desarrollo tecnológico, cultural, social, político y económico, existen muchas personas en situación de esclavitud.

Las Naciones Unidas preocupada por este tema ejecuto una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional; además de ello propuso un Protocolo con la finalidad de poder realizar acciones de prevención, reprensión y sanción contra la Trata de Personas, con especial incidencia en las mujeres y niños, al que denomino: Protocolo de Palermo. Así mismo se ha definido el término “trata de personas”; el cual ha sido debatido en extenso por la comunidad internacional; encontrando puntos de coincidencia en las características que presenta este problema como la vulnerabilidad, consentimiento y explotación; elementos que son fundamentales a la hora de poder esgrimir una definición sobre el tema.

Morillo (2015), señala que el delito de trata de personas en nuestro país se encuentra regulado en el artículo 153° del Código Penal y concuerda con la definición proporcionada por el Protocolo de Palermo. Sin embargo, cabe precisar que el consentimiento de las víctimas puede catalogarse como una causa que excluye la tipicidad del delito mencionado de acuerdo a nuestra normatividad penal, lo cual es objeto de nuestro estudio.

Con fecha 21 de octubre se realizó una modificación al artículo 153° de la norma sustantiva, quedando establecido en el apartado cuarto que: “El consentimiento dado por la victima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso primero”. En el inciso primero se detallan características como: violencia, coacción, formas de amenaza, restricción de libertad, engaño, fraude, situación de vulnerabilidad, abuso de poder, concesión o recepción de pagos o cualquier otro tipo de beneficio, sumándose también la captación, el traslado, el transporte, acogimiento y retención de otro en el territorio nacional;

la sanción corresponde de ocho a quince años; esto se aplica tanto para los sujetos que ingresan o salen del país.

La descripción del artículo 153° de nuestro Código Penal, como ya hemos mencionado, tiene como fundamento el Protocolo de Palermo; el cual dentro de su contenido propio indica que la trata de personas está referido o se debe de entender a las acciones de captación, traslado, transporte, recepción o acogida de personas; acciones que se desarrollan mediante el uso de la fuerza, la amenaza, así como de otras formas de coacción, ya sea por medio del rapto, engaño, fraude, vulnerabilidad, abuso de poder; recepción o beneficios de pagos, para poder obtener la anuencia de la víctima con la finalidad de la explotación. La explotación implica el ámbito sexual o prostitución; servicios o trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. El presente protocolo establece que el consentimiento otorgado por la víctima no se debe tener en cuenta cuando se haya empleado cualquier medio para lograr dicho consentimiento.

Dentro del contexto doctrinario encontramos base a la opción recogida, debido a que se discute si se debe otorgar validez al consentimiento de la víctima; ya que la dignidad humana es también un bien jurídico y no se encuentra a libre disposición, conforme lo indica Verges (2007), quien es de la posición que el mencionado delito guarda relación no solo con la tutela penal, sino también humanista, por lo cual al efectuarse la protección de la dignidad, se estaría afectando la naturaleza del ser humano; situación que es calificada como indisponible por el titular; debido a ello su concepción, investigación y procesamiento deberá ser comprendido conforme al principio *pro homine*; destacando que es la tendencia que actualmente predomina en el derecho comparado.

Quintero (2002), por otra parte, indica que el consentimiento otorgado por la persona carece de eficacia jurídica, debido a que tal eficacia depende del poder de decisión que el ordenamiento jurídico ha reconocido al particular, quien vendría a ser el titular del bien jurídico, respecto del mantenimiento del mismo, lo cual no se presenta cuando se trata de la dignidad humana.

Peña (2015), presenta su punto de vista sobre el tema manifestando que en el caso de los mayores de edad no existe controversia respecto al consentimiento que podrían otorgar para que sean trasladados de un lugar a otro, siendo eliminada la tipicidad en esos casos; sin embargo, esta acción constituye el medio por el cual se vale el autor para que con

posterioridad, su persona u otro, coloque a la víctima en una situación de esclavitud sexual y/o laboral; por ese motivo el asentimiento que pueda brindar la víctima no puede tener efectos jurídicos válidos.

A nivel internacional la Organización Internacional de Trabajo – OIT; ha calculado en más de 2 millones y medio el número de víctimas en lo que respecta al delito de trata de personas, ilícito que genera grandes dividendos económicos calculados en un promedio de 12 mil millones de dólares; de los cuales, entre 5 y 7 millones, son generados por la explotación sexual. Las ganancias de los tratantes se estima que alcanzan un promedio de unos 32 millones de dólares al año; este dato es consignado por estimaciones realizadas por las víctimas que han sido rescatadas de este flagelo.

A nivel nacional no se tienen estimaciones concretas al respecto, ya que la naturaleza de este fenómeno delictivo es de manifestación oculta. Sin embargo, aunque no se cuenten con estadísticas de tipo económico, el delito de trata de personas se encuentra asociado a otros tipos de negocios como: saunas, bares, picanterías, restaurantes, etc.; donde se ofrecen servicios sexuales a quienes acuden a dichos lugares, ofreciéndoles acompañamiento; de tal forma que las mujeres son utilizadas como un medio que les proporcionará una mayor ventaja económica. Estas redes a las cuales se hace mención se encuentran muy bien estructuradas, cuya apariencia legal engaña a primera vista a quienes no conocen del tema.

La intención de esta investigación es analizar el tema desde el punto de vista de los derechos fundamentales con la finalidad de contribuir a poder entregar soluciones viables que ayuden a disminuir este problema de manera efectiva, por medio de programas de prevención que deberán ser realizados bajo la responsabilidad del Estado Peruano contra esta criminal forma de explotación.

Para la configuración del ilícito de trata de personas se deben de constatar los siguientes puntos: Hay que tener en cuenta que este delito no distingue edad, ni género, es decir, pueden ser tanto hombres como mujeres las víctimas; así mismo no es necesario un traslado internacional, por tanto, únicamente se requiere que la víctima sea extraída de su hogar o núcleo familiar con fines de explotación. El cargo delictivo de este tipo de actividad se presenta por la acogida, el traslado, la recepción, el rapto, el uso de la fuerza, el aprovechamiento o fraude de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima y de su entorno familiar. El consentimiento no es relevante cuando se han utilizado métodos de coerción o

en casos en que la víctima es menor de edad. Cabe señalar que, para poder sancionar el delito bajo análisis, es innecesario demostrar la explotación de manera efectiva, únicamente se debe de acreditar el uso de los recursos mencionados líneas anteriores.

Internacionalmente la trata de persona es un acto delictivo que se encuentra debidamente tipificado y penalizado, para ello existe un procedimiento denominado Protocolo TdPs; el cual fue suscrito por diversos países a nivel mundial en el año 2000 y en nuestro país entro en vigencia en el 2003; bajo la denominación de: “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”; dicho protocolo incorpora un instrumento en el cual se establecen las normas, definiciones y procedimientos que se deben de seguir para poder priorizar la defensa de los derechos humanos, dando una adecuada protección a las víctimas que son flageladas por esta singularidad criminal.

De acuerdo a las particularidades de tipo geográfico y socio económico de regiones determinadas, es posible el poder construir un perfil de víctimas de este flagelo del siglo moderno; ya que generalmente se afecta a personas sin distinción de edad, género, grado de instrucción, profesión y formas de vida; vale decir que cualquier sujeto podría ser una víctima del citado delito, incluso sin llegar a tener conciencia sobre ello; tal como ocurre en los casos de tráfico de órganos o en la venta de niños.

La trata de personas es definida por el Protocolo TdPs como: la captación, traslado, transporte, acogida o recibimiento de personas, a las que haciendo uso de la amenaza, la fuerza u otro medio de coerción, se logra obtener su consentimiento para que sea sometida a la autoridad de otra persona, con la finalidad de explotarla por medio del servicio sexual, el trabajo o servicios de carácter forzado, así como la esclavitud o prácticas similares, la sumisión o la moderna extracción de órganos, para su posterior venta en el denominado mercado negro.

En la definición que se ha mostrado concurren algunos elementos que deben de tenerse en cuenta en la comisión del delito bajo comentario: la acción, los medios y el fin. Con respecto a la acción la cual es también interpreta como ¿qué se hace?, constituyen las actividades de captación o reclutamiento; el transporte o el traslado; el recibir o acoger a uno o varios sujetos con la finalidad de explotarlos. Los medios como ya se ha mencionado se refiere a la pregunta ¿cómo se hace? Lo cual puede darse bajo el ejercicio de la fuerza, las amenazas, el rapto, la coacción, el abuso de poder, el engaño, por condiciones de

vulnerabilidad, por beneficios o pagos de índole económica o por autoridad sobre la víctima. Por último, el fin que responde a la interrogante: ¿para qué se hace?; ya que su finalidad es la explotación y esta se efectiviza por medio de la explotación sexual, la prostitución, la esclavitud, los trabajos forzados y la extracción de órganos humanos

Por medio de la Ley N° 28950, denominada “Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes”, nuestro país ha incorporado este tema dentro de la normatividad penal, teniendo como base el Protocolo TdPs; dicha ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N° 007-2008-IN; dichos documentos normativos fueron aprobados por el ejecutivo en los años 2007 y 2008, correspondientemente. Bajo esta perspectiva el Código Penal Peruano señala: que será sancionado penalmente con penas privativas de libertad entre ocho como mínimo y quince como máximo las personas que favorezcan, promuevan, faciliten, financien, el reclutamiento y selección de sujetos; así como también aquellos que los transporten, trasladen o acojan sabiendo el fin, dentro del territorio nacional; haciendo uso de la fuerza, la coacción, la amenaza, el abuso de poder o las condiciones de necesidad de la persona, con fines de explotación la cual puede ser la realización de trabajos forzados, el ejercicio de la prostitución, la explotación sexual, la práctica de la mendicidad, así como también la extracción o tráfico de órganos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el legislador en nuestro ordenamiento ha considerado contextos o condiciones que resultan ser agravantes en el desarrollo de este delito, situaciones que se plasman en el artículo 153° - A; considerando lo siguiente: La pena podría fijarse entre doce y veinte años si el sujeto que cometió el delito es un funcionario público; o si en la comisión del delito se encuentran varias personas perjudicadas; o si el sujeto es un empresario y su labor tiene que ver con organizaciones sociales presentando ventajas sobre esa condición; o si el sujeto pasivo tiene entre catorce y dieciocho años o sufre de alguna condición que le declararía incapaz; o si el sujeto es responsable de la víctima en condición de tutor, cónyuge, adoptante o pariente hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad; por último, si el acto es desarrollado por más de una persona.

En el artículo 153° - A de la norma sustantiva se establece que la pena privativa de libertad será no mayor de veinticinco años en casos en los que se produce alguna lesión grave o se llega a la muerte o se ponga en peligro la seguridad y la vida de la víctima, o también cuando el sujeto pasivo tiene menos de catorce años o padece de alguna discapacidad de

índole mental o física; o finalmente, si el victimario es integrante de alguna organización delictiva.

Es importante señalar los diferentes delitos afines que se encuentran en relación con el delito de trata de personas, ya que, debido a sus particularidades propias, algunos operadores del derecho tienden a entrar en confusión, generando erróneas percepciones sobre los tipos penales en los cuales se incurre. Esta falta de información genera la responsabilidad de dar a conocer los componentes esenciales del delito de trata, el cual se encuentra previsto en el Código Penal Peruano; así como también con los ilícitos que encuentran regulados con la denominación de delitos afines a la trata; lo cual no implica que el delito principal de trata de personas sea accesorio a estos, ya que en situaciones diversas se configura un concurso real de delitos.

Para el presente análisis se ha tomado la doctrina y la jurisprudencia como base; es así que en referencia a los delitos afines en relación a la explotación sexual tenemos: la violación; el favorecimiento de la prostitución; el usuario – cliente; el delito de rufianismo; el ilícito de proxenetismo; el injusto de turismo sexual infantil y la pornografía infantil.

La violación sexual está contenida en el artículo 170° de la normativa sustantiva; no entraremos en el detalle de su definición, pero si en el contexto de cómo se vincula con el delito de trata de personas ya que este hecho delictivo es consecuencia de la práctica del acto sexual en contra de la acción voluntaria de la víctima. El ilícito penal se centra en la vulneración del derecho a la libertad sexual; ya que el sujeto activo impone un acto en contra de su voluntad psicológica y física.

El favorecimiento de la prostitución se encuentra regulado de manera específica en el artículo 179° del Código Penal. La norma citada no sanciona directamente a la prostitución sino a las actividades que se encuentran vinculadas al ejercicio de esta; dicha acción se configura cuando otras personas son las que sirven de encubridoras o mediadoras para el logro de tal fin; por ello el favorecimiento debe de comprenderse como el comportamiento que ayuda a vencer las dificultades para que se desarrolle el ejercicio de la prostitución. La palabra promover debe de entenderse acá como alguien que inicie en la prostitución a otra persona, es decir que incite el desarrollo de tal acción, influyendo psicológicamente en ella, para que esta persona opte por ejercer el meretricio.

Rivera (2009), considera que la trata de personas posee antecedentes de tipo sociales e históricos, las cuales se encuentran relacionadas a experiencias esclavistas que se han desarrollado desde inicios de la humanidad, cuya característica esencial es la captación forzosa, la amenaza y la coerción ya que el objetivo es poder esclavizar por medios diferentes, pero siempre por medio del uso de la fuerza.

Daillier (1999), señala que el *ius cogens* o también denominado *jus cogens* es un principio del cual se hace uso en el Derecho Internacional Público; el cual hace referencia a normas vinculadas al derecho perentorio o imperativo, acción que significa que no se admite ni la alteración, ni la exclusión de su contenido, de tal forma que cualquier acción que sea contraria a la misma podrá ser declarada como nula. El *ius cogens* busca el amparo de las ventajas colectivas que son fundamentales para el grupo social; bajo esta perspectiva este tipo de normas se ubican en una posición superior jerárquica en relación a las demás disposiciones del ordenamiento, por lo cual se confrontan las reglas del derecho dispositivo denominado *ius dispositivum*.

La Convención de Viena, en el artículo 53° señala de manera específica sobre el Derecho de los Tratados, especificando lo siguiente: la nulidad de un tratado se configura cuando se encuentra en contradicción a la normatividad que impera en el derecho internacional. Así mismo el artículo 64° considera que, si nace una norma imperativa nueva dentro del derecho internacional, todo tratado que se encuentra contrapuesto a la norma será de carácter nulo y concluirá.

A la trata de personas se le considera como una forma de esclavitud moderna que trasgrede la dignidad humana, que constituye un bien jurídico tutelado dentro del ámbito penal; cabe señalar que la dignidad humana no constituye un bien jurídico de disposición libre, ya que la trata de personas es semejante a la esclavitud ya que su fin es la explotación. Dentro de la concepción moderna de la doctrina, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que el ilícito de trata se encuentra enmarcada como una forma de esclavitud moderna, en donde la víctima es considerada una mercancía u objeto cuya finalidad es la explotación.

Cabe señalar que la figura de la esclavitud es de remoto tiempo, ligado al nacimiento de la humanidad; desde el tiempo de la cultura griega los filósofos la concebían como contradictoria al derecho natural. Platón manifestaba que la esclavitud era necesaria para la

sociedad; pero no la concebía dentro de su sociedad ideal que plasmo en su obra cumbre La República. En 1926 se suscribió un tratado internacional al cual se le conoció como la Convención sobre la Esclavitud; el cual surgió en el marco de la Sociedad de Naciones, entrando en vigencia con fecha 9 de marzo del año 1927; en el cual se exige a los Estados que conformaron dicha convención suprimir la esclavitud, el trabajo forzado y la trata de esclavos; asimismo, en relación a la esclavitud, es definida como la condición o estado de un sujeto sobre la cual se ejecutan atributos del derecho de propiedad. Así también la trata de esclavos se le define como la captura, cesión o adquisición de una persona para cambiarlo o venderlo. En Ginebra el 7 de setiembre de 1956, se desarrolló la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud; cuyos acuerdos entraron en vigencia con fecha 30 de abril del año 1957; en dicho acuerdo se decretó abolir de manera contundente y a la brevedad posible toda practica esclavista; así como también desarrollar la normatividad legislativa que sancione dichas prácticas, que aún continuaban desarrollándose.

El derecho internacional constitucionalmente reconocido en nuestro país se ha pronunciado sobre el tema, por medio de los tratados y de la aprobación de la jurisdicción supranacional en temas de libertades fundamentales y con relación a derechos humanos; es así que en nuestra Carta Magna (1993) en el artículo 205° se señala que: habiéndose agotado la jurisdicción interna; el que se sienta vulnerado en sus derechos puede acudir a organismos supranacionales, de acuerdo a los convenios y tratados, en los que el país es miembro integrante.

El Código Procesal Constitucional Peruano; aprobado mediante la Ley 28237; expresa en su Título Décimo respecto a la Jurisprudencia Internacional, lo cual guarda correspondencia con el artículo 205° de la Carta Magna, indicando que las entidades internacionales a las que podrá recurrir cualquier persona que se sienta lesionada en sus derechos, que no son reconocidos en el país podrán acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y otras organizaciones que se instituyan en el futuro y que sean ratificadas por los tratados que subscriba el país.

En dicha norma procesal también se prescribe que respecto de los pronunciamientos de los organismos internacionales a los que se haya sometido el Estado Peruano, no se requiere eficacia y validez para su reconocimiento; dichos documentos oficiales son

comunicados al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que a su vez comunica al Presidente del Poder Judicial y éste pone en conocimiento al Magistrado donde se concluyó la jurisdicción interna para que disponga su ejecución a través del juez competente, actuando en concordancia a lo dispuesto por la Ley 27775; la cual reglamenta el procedimiento ejecutorio de resoluciones emitidas por tribunales internacionales. Por último, el Estado Peruano es parte integrante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, situación que ratifico en el 2001; dicho organismo ha consolidado las normas en el ámbito penal de manera internacional a nivel de Latinoamérica.

El ilícito de trata de personas consiste en una actividad criminal de carácter muy lucrativo, que al igual que el tráfico ilícito de drogas y la venta ilícita de armas, constituyen actividades vinculadas al crimen organizado; puede presentarse también el tráfico ilícito de migrantes, aunque constituye un delito distinto. La trata de personas se define internacionalmente de acuerdo al artículo tercero tal como lo establece el Protocolo para la prevención, represión y sanción de este delito, teniendo un tratamiento especial en lo concerniente a mujeres y niños. Dicho ilícito, comprende las actividades de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, haciendo uso de la amenaza, la fuerza o cualquier otra forma de coacción, en aras de obtener el consentimiento del sujeto pasivo, para con ello explotarlo.

Dicha explotación incluye la sexual, los servicios o trabajos forzosos, la esclavitud o alguna práctica análoga, la subordinación o la extirpación de órganos. El consentimiento otorgado por el sujeto pasivo de este ilícito es una forma de explotación, la cual puede haber sido logrado por la fuerza; así mismo la participación en cualquiera de sus variantes descritas en la definición es considerada como trata de personas, por último, por niño deberá entenderse a toda persona menor de dieciocho años.

La definición que se ha descrito en cada uno de sus apartados permite la formulación de acciones penales en el ámbito nacional e internacional, la cual podrá evidenciarse en tres componentes: los actos; los medios de los cuales se hicieron uso para cometer dichas acciones y los objetivos o fines con las cuales se realizaron (firmas de explotación). Si bien es cierto el Protocolo no hace una definición precisa del término explotación, sin embargo, precisa las condiciones o características que se podrían presentar.

El párrafo segundo del artículo 37° de la Convención contra la Delincuencia Organizada señala que para aplicar el Protocolo; los Estados deben ser integrantes de la Convención, situación que implica que las disposiciones que contiene se deben de aplicar de manera estricta en resguardo de la justicia y la libertad. Sin embargo, dichas prerrogativas sólo serán aplicadas a los Estados miembros. El Protocolo señala que el citado delito es aplicable en busca de la prevención, investigación y penalización, de los actos delictivos que se encuentran tipificados, incluidos las acciones transnacionales por medio de los actos delictivos organizados.

El tráfico ilícito de migrantes es una acción delictiva que se encuentra en muy estrecha relación con el injusto de trata de personas, el cual tiene una fuerte afectación a la seguridad pública. El Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, perfecciona la Convención de las Naciones Unidas, combatiendo la delincuencia organizada. El artículo segundo del referido Protocolo enfatiza la importancia de prevenir y luchar contra el delito de tráfico ilícito de los migrantes; así mismo promueve la colaboración entre los Estados miembros, con el objetivo de proteger los derechos de las personas afectadas por tal delito. El artículo tercero, en su inciso primero, esboza un concepto sobre el término tráfico ilícito, señalando que es el poder otorgar la facilidad de un ingreso ilegal de una o más personas a un Estado al cual no pertenece, ni reside permanente; el objetivo es la búsqueda de un beneficio directo o indirecto de carácter financiero u otro de tipo material.

Asimismo, el artículo quinto se centra en la responsabilidad penal de los migrantes, considerando que no serán procesados en juicios penales, debido a la vulneración de sus derechos y al agravio de su dignidad, en concordancia a lo establecido en el Protocolo. Las Naciones Unidas en atención a los derechos humanos han señalado en su informe del año 2002 cuatro principios y once directrices sobre la trata de personas. Los principios son: primacía de los derechos humanos; prevención de la trata de personas; protección y asistencia y, por último, penalización, sanción y reparación. En cuanto a las directrices son: promoción y protección de los derechos humanos; investigación, análisis, evaluación y difusión; identificación de las víctimas y de las personas que se dedican a estas actividades ilícitas (tratantes); establecer un marco jurídico adecuado; asistencia y protección a las personas flageladas por este delito; medios para el adecuado cumplimiento de la ley; la prevención; acceso a recursos; medidas especiales para proteger y asistir a los niños que son víctimas de este accionar; cooperación y coordinación entre Estados y regiones; y por último,

obligaciones del personal de la policía civil, humanitario y diplomático, para realizar acciones con el fin de mantener la paz.

Los principios que se han detallado se encuentran dentro de la legislación nacional, específicamente en el Reglamento de la Ley 28950 que tiene como denominación “Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”; normativa en la cual en su segundo artículo señala los principios: perspectiva de género, protección integral de la víctima; primacía de los derechos humanos; interés superior del niño y adolescente; y por último, información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia, reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad. El mencionado reglamento establece que, dentro de sus competencias, las entidades que tienen la obligación de prevenir la perpetración de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de los migrantes son: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; Ministerio de Educación; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Ministerio de Justicia; Ministerio Público; Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por último el Poder Judicial; así como también los gobiernos locales y regionales, todo ello en concordancia con el artículo sexto del citado reglamento.

En nuestro país la normativa internacional sobre derechos humanos se encuentra plenamente aceptada y respaldada por nuestra normatividad. Por ello la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue proclamada y aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948; y en nuestro Estado fue también aprobada por medio de una Resolución legislativa once años después de su creación. También en nuestro país se reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual se origina en las Naciones Unidas en 1966 y es aprobado en nuestro país en 1978, doce años después. Asimismo, tenemos a la Convención de las Naciones Unidas sobre la esclavitud, la cual fue promulgada por la Sociedad de Naciones en 1926; en esta normatividad se define a la esclavitud como una condición o un estado de un individuo sobre el que se ejercen los atributos de la propiedad, tal como se señala en el artículo primero. Por otra parte, la trata de esclavos es definida como todo acto de captura cesión o adquisición de una persona para cambiarlo o venderlo y en general como todo acto de transporte o comercio de esclavos; también mencionado en el artículo primero.

Así también tenemos otras normas internacionales como el Protocolo para variar la Convención sobre la Esclavitud; normatividad firmada en Ginebra en 1926; adoptada por las Naciones Unidas en 1953. Se tiene también a la Convención Suplementaria que aborda el tema sobre la abolición de la esclavitud, así como la trata de esclavos, amparada por la Conferencia de Plenipotenciarios requerida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1956, en la que se estableció una obligación de los Estados para conseguir como fin la abolición de la esclavitud y de las prácticas análogas. Tenemos también a la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; suscrita por las Naciones Unidas en 1990 y refrendada en nuestro país en el 2004, pero entro en vigencia en el año 2006.

Como otra de las normas internacionales tenemos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, celebrada en la ciudad de Palermo, Italia, en el 2000 y aprobada en nuestro país por medio de un Decreto Supremo N° 088-2001-RE. Tenemos también el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente respecto a mujeres y niños, el cual perfecciona la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, y que fue aprobada en el 2000, siendo en el Perú reconocida plenamente en el 2001 por el Congreso de la República.

En esa misma línea, tenemos además el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire; norma que perfecciona la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional; formulada en el 2000 y ratificada en nuestro país en el 2001 por el Congreso de la República. En fin la lista es bastante larga en cuanto a la normatividad internacional que también tiene referencia legal en nuestro país como: la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de Niños, la prostitución Infantil y la utilización de los niños en la Pornografía; el Convenio 01 de la OIT, referido a las horas de trabajo en las empresas industriales; el Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso; el Convenio 105 de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso; el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

La normativa a nivel regional y subregional es también de aplicabilidad dentro de nuestro territorio. Así tenemos a la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de edad; y por último, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para).

En base a todo lo expresado dentro de la problemática del estudio la pregunta de investigación es: ¿El consentimiento de la víctima mayor de edad en el caso de las mujeres migrantes en el país es considerada causal de exoneración de la responsabilidad penal en el delito de trata de personas en concordancia a lo que establece el Código Penal Peruano?

La justificación del presente estudio desde un punto de vista teórico considera que hasta el momento no se tiene expresamente señalado el problema del consentimiento de la víctima mayor de edad sobre el delito de trata de personas. La importancia recae en el hecho de abordar la trasgresión de los derechos fundamentales de la persona, que tienen que ser explicados como la libertad, la vida y la dignidad humana. La prostitución ligada a la trata de personas es una actividad muy lucrativa por debajo del tráfico ilícito de drogas y el tráfico de armas.

La contribución práctica del presente estudio es el poder analizar soluciones frente a un problema de judicialización escasa en el Perú sobre el delito bajo análisis, el cual constituye y está tipificado como un delito muy grave. Sin embargo, a pesar de ser un delito grave se tiene una estadística escasa al respecto sobre casos de trata de personas; lo cual demuestra a la vez, la existencia de pocos casos judicializados y por ende con pocas condenas. Por otra parte, tanto la capacidad de gestión como los recursos de los operadores jurídicos son insuficientes para poder hacer frente de manera sistematizada a este delito, que mayormente está vinculado al crimen organizado.

La hipótesis general que se plantea en la investigación está formulada en los siguientes términos: el consentimiento de la víctima mayor de edad migrante es causa de exoneración de la responsabilidad penal en el tipo penal de trata de personas del Código Penal Peruano; condición que no es consistente con el carácter de bien jurídico no disponible de la dignidad humana, el cual es el bien jurídico tutelado en este ilícito.

El objetivo general del estudio consiste en establecer si el consentimiento de la víctima mayor de edad migrante es causa de exoneración de la responsabilidad penal en el tipo penal de trata de personas dentro del Código Penal Peruano, el cual es consistente con el carácter de bien jurídico no disponible de la dignidad humana, bien jurídico tutelado en el delito de trata de personas.

Dentro de los objetivos específicos tenemos: establecer si la dignidad humana es un bien jurídico disponible, a la luz del Derecho Constitucional; así como también establecer si la dignidad humana es un bien jurídico disponible, a la luz de las normas del ius cogens del Derecho Internacional; se tendrá en cuenta el poder establecer si la trata de personas en mujeres migrantes es una modalidad de la esclavitud, teniendo en cuenta los fines de explotación del delito de trata de personas, vinculados a las características esenciales de la esclavitud; y por último, determinar si la trata de personas en mujeres migrantes es un delito grave, que bajo ciertas circunstancias puede llegar a constituir un crimen de lesa humanidad.

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación

El tipo de investigación es descriptiva, desarrollada bajo un diseño no experimental. De acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista (2014); las investigaciones descriptivas se centran en la observación y el análisis del contexto real; como suceden y como se presentan los fenómenos; los cuales no son manipulables por el investigador; suceden dentro del contexto referido en el análisis real contextualizado del problema que se encuentra abordado. Los estudios descriptivos no buscan una formulación de causa – efecto; su objetivo es la descripción del fenómeno dentro del contexto de su ocurrencia.

El diseño no experimental en una investigación que está asociado a los estudios descriptivos; razón por la cual Sanca (2011), señala que los diseños no experimentales desarrollan la descripción de un contexto real; en la cual se desarrolla el estudio; lo cual condiciona de forma precisa las características que presenta el fenómeno en estudio, así como también las propiedades que están asociadas a este; tratan de detallar de manera objetiva la realidad para poder realizar una muy pertinente interpretación del contexto en el cual se encuentran los hechos; bajo tal perspectiva Hernández, Fernández, y Baptista (2014), consideran que el diseño no experimental tiene por finalidad realizar la medición o sistematizar la información de las variables en estudio; su utilidad se fundamenta en el hecho de que los resultados deberán mostrarse de forma clara y concisa en atención a las dimensiones e indicadores de las variables.

2.2. Operacionalización de variables

La finalidad del procedimiento de operacionalización de las variables, de acuerdo a la concepción de Espinoza (2018) y Medina (2014), quienes afirman que dicho proceso constituye la transformación de un concepto teórico abstracto en una condición de mayor accesibilidad cognitiva; por lo cual será más factible aplicar la medición de un instrumento, ello demanda una mayor precisión y homogeneidad es lo que se desea realizar; implica este hecho el poder identificar las dimensiones e indicadores de cada una de las variables que encontramos en el estudio de investigación a desarrollar. Para Hernández (2014), desde su punto de vista afirma que el procedimiento de la operacionalización de las variables va a permitir señalar oportunamente las actividades que se van a desarrollar en función de la atención de las variables que hacen un análisis del contexto real en las que se encuentran;

por lo cual se atenderán una serie de especificaciones que deberán ser recogidos para articular los datos e información de la variable.

Carballo y Guelmes (2016), van más allá, ya que desde su punto de vista toda investigación requiere del procedimiento de la operacionalización de las variables; este procedimiento deberá de desarrollarse atendiendo a un orden establecido; lo cual demanda que como primer paso se debe de realizar la individualización de las variables en estudio; el segundo procedimiento implica la revisión de las bases teóricas y la caracterización de las mismas; el tercero implica la operacionalización en sí de las variables que deberá atenderse en base a la información recopilada previamente; atendiendo a las dimensiones e indicadores establecidos y, finalmente, la cuarta fase deberá formular escalas de medición; cabe señalar que en el trabajo realizado la medición es ordinal.

Tabla 1. Operacionalización de las variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA	INSTRUMENTO
Delito de trata de personas	El ilícito de trata de personas consiste en una actividad criminal de carácter muy lucrativo, que al igual que el tráfico ilícito de drogas y la venta ilícita de armas, constituyen actividades vinculadas al crimen organizado; puede presentarse también el tráfico ilícito de migrantes, aunque constituye un delito distinto.	La trata de personas se define operacionalmente de acuerdo al artículo tercero, tal como lo establece el Protocolo para la prevención, represión y sanción de este delito, de manera especial en lo concerniente a mujeres y niños. El delito comprende las actividades de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, por medio de la amenaza o el uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción, con la finalidad de obtener el consentimiento de la víctima, y con ello explotarla.	Dedicación voluntaria	Negocian y ofrecen servicios sexuales. Eligen a clientes. Se apropian de las ganancias.	Ordinal	Cuestionario dirigido a los abogados especialistas. Cuestionario a mujeres dedicadas a la prostitución
			Expectativas socio – jurídicas	Respeto de sus derechos. Reconocimiento de la actividad sexual. Consideran no sancionables la conducta de terceros por el desarrollo de la actividad sexual. Sancionar como delito que una persona ejerza la prostitución o continúe en el oficio. Creación de las Zonas Rosas.		
			Vulneración de la libertad	Obligada a ejercer la prostitución. Afectación de la dignidad humana.		
			Delincuencia internacional	Bandas organizadas. Uso de la fuerza. Coacción.		

Consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes	El consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes se define bajo el hecho de que las personas, en este caso las mujeres que llegan al país vienen con la intención de desarrollar la prostitución; sin embargo, llegan al país por medio de contactos establecidos previamente.	Consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes, operacionalmente se evidencia esta acción cuando la persona tiene pleno conocimiento y planifica la acción que va a desarrollar como es el ejercicio de la prostitución.	Consentimiento	La persona está consciente de la actividad que va a desarrollar.	Ordinal	Cuestionario dirigido a los abogados especialistas. Cuestionario a mujeres dedicadas a la prostitución
			Tipo de prostitución	Burdeles o lenocinios. Prostitución por medio de agencias. Prostitución que se desarrolla por medio de las redes sociales. Prostitución que pertenece a una banda criminal organizada.		
			Dignidad Humana	Derechos humanos. Afectación de la dignidad.		
			Delitos afines	Violación sexual. Violencia de género. Favorecimiento de la prostitución. Usuario – cliente. Delito contra la unidad de migraciones. Rufianismo. Proxenetismo. Turismo sexual. Pornografía.		

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

2.3. Población, muestra y muestreo

La población en palabras de Ventura (2017); nos dice que está referida a un conjunto de elementos, que guardan características similares y son el objeto de estudio de la investigación; así también Arias –Gómez, Villasís y Miranda (2016); manifiestan que para poder elegir una población se debe de tener en cuenta que es el referente para poder posteriormente señalar la muestra.

En la presente investigación la población está constituida por profesionales en el campo del derecho; se han tomado un total de 30 abogados; los cuales pertenecen al colegio de la región Piura; inscritos y habilitados en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Asimismo, se tiene como muestra a 20 mujeres que se dedican a la prostitución. La muestra tal como afirma Niño (2011); implica el poder seleccionar un grupo del colectivo mencionado.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Las técnicas de investigación aplicadas, tal como señala Bernal (2010), son de dos tipos: de gabinete y de campo. Con respecto a las técnicas de gabinete se ha aplicado el fichaje, el análisis documental y el uso del internet. Las técnicas de campo estuvieron dirigidas hacia la aplicación de los instrumentos de investigación, los cuales permitieron recoger los datos y haciendo uso de la estadística descriptiva fueron procesados y sistematizados; dichos instrumentos fueron aplicados a los abogados y también a mujeres que se dedican a la prostitución y laboran en el lenocinio “La Colmena”; en la provincia de Piura.

2.5. Procedimiento

En relación al instrumento aplicado a abogados que pertenecen al Ilustre Colegio de Abogados de la región Piura; este se realizó sin pormenores contando con la colaboración de los operadores del derecho; teniendo un total de 30 cuestionarios resuelto. En cuanto a las mujeres que laboran en actividades de prostitución se aplicaron 20 cuestionarios de forma efectiva; recogiendo la información de manera veraz y fidedigna; los instrumentos fueron aplicados dentro del contexto, tiempo y programación señalada.

2.6. Método de análisis de datos

Los métodos de análisis aplicados en el desarrollo de la investigación estuvieron más ligados al uso de la estadística descriptiva para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos; pero para llegar a ellos se usó el software estadístico SPSS en la versión 22; por medio de dicho programa se evaluó la confiabilidad de los resultados por cada uno de los instrumentos diseñados para el desarrollo de este estudio. Finalmente, se procedió a la interpretación de la información haciendo uso de los métodos de investigación como: inductivo – deductivo y analítico – sintético.

2.7. Aspectos éticos

El desarrollo de la investigación respeta el consentimiento informado y la privacidad de los datos que fueron alcanzados por los abogados y por las mujeres que laboran en la prostitución de manera activa. Asimismo, se ha seguido los lineamientos establecidos por la Universidad César Vallejo; en materia del protocolo que se ha desarrollado, considerando los puntos y capítulos a tratar; sumándose a ellos, la aplicación de la normatividad de asientos bibliográficos bajo el formato APA – Asociación de Psicólogos Americanos; el cual se encuentra en su sexta edición; por tanto, la investigación no contiene plagio.

III. RESULTADOS

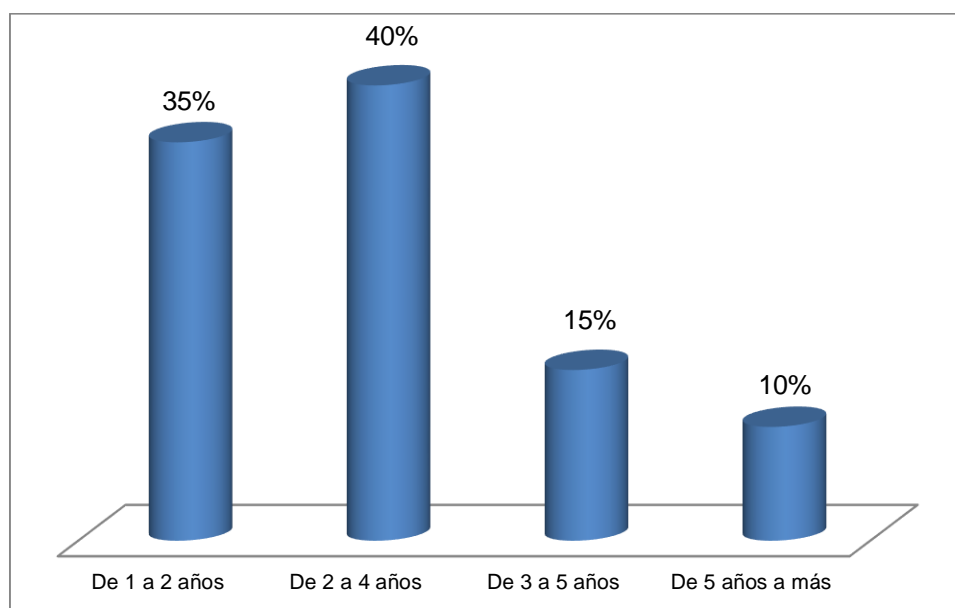
Para conocer con mayor precisión el tema que abordamos en la presente investigación, se aplicaron dos instrumentos, uno dirigido a trabajadoras sexuales y otro a los operadores del derecho. Empezaremos describiendo los resultados obtenidos de las trabajadoras sexuales; es así que la primera pregunta formulada fue: ¿Cuánto tiempo lleva desempeñado está actividad? El 35% de las encuestadas manifestó que lleva en promedio de uno a dos años; un 40% respondió que lleva ejerciendo de dos a cuatro años; un 15% de tres a cinco años y el 10% restante más de 5 años. No se brinda ninguna explicación adicional a este contexto descrito; esta labor del ejercicio del meretricio demanda juventud para poder ofrecer sus servicios sexuales.

Tabla 2. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñado está actividad?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
De 1 a 2 años	7	35%
De 2 a 4 años	8	40%
De 3 a 5 años	3	15%
De 5 años a más	2	10%
TOTAL	20	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 1. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñado está actividad?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

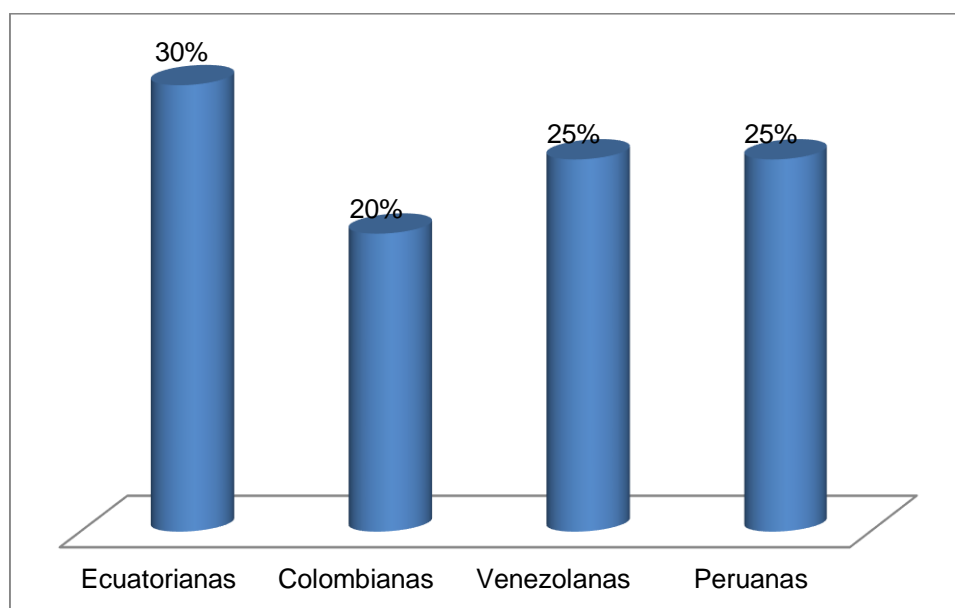
Se preguntó también respecto a la nacionalidad de las mujeres encuestadas resultando que: el 30% señala que son de nacionalidad ecuatoriana; un 20% colombiana; un 25% de nacionalidad venezolana y el 35% restante de nacionalidad peruana. Las mujeres que ingresan por la frontera norte, específicamente Tumbes, llegan al Perú declarando que vienen a realizar actividades de turismo en el caso de las ecuatorianas y las colombianas; en el caso de las venezolanas han ingresado al Perú buscando opciones laborales según su declaratoria, pero en realidad venían a trabajar en el meretrício. Dichas mujeres no son nuevas en el negocio; conocen de su estructura y su comportamiento; inclusive sirven de contacto para traer a otras connacionales con el mismo objetivo de trabajar; incluso hay quienes ya registran varias entradas y salidas del país; en el caso específico de las ecuatorianas y las colombianas.

Tabla 3. Nacionalidad de las meretrices

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Ecuadorianas	6	30%
Colombianas	4	20%
Venezolanas	5	25%
Peruana	5	25%
TOTAL	20	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 2. Nacionalidad de las meretrices



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

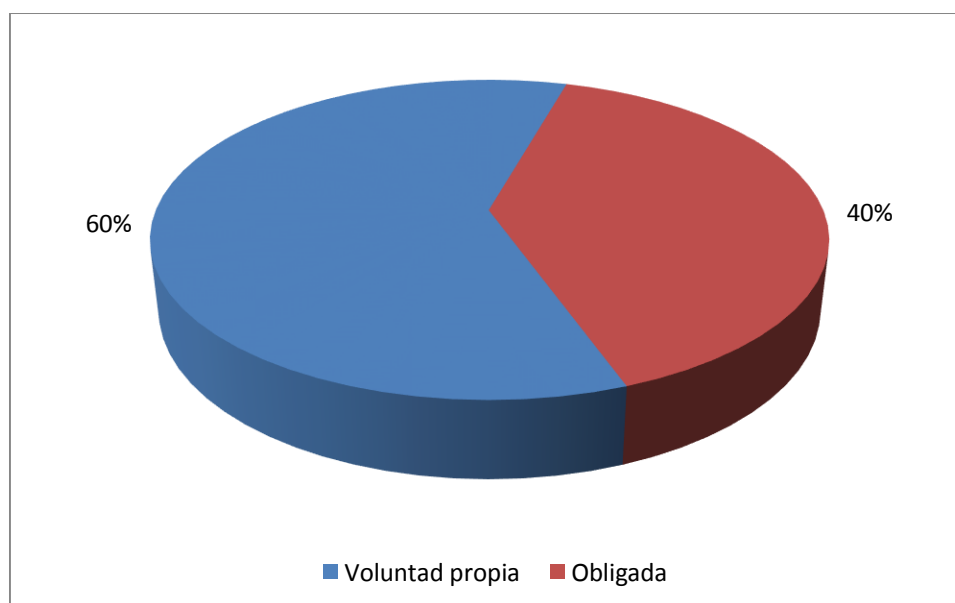
Otra de las preguntas fue: ¿bajo qué condición se dedican a esta actividad? El 60% de las meretrices declara que es por propia voluntad; bajo este sentido el desarrollo de esta actividad la realizan por necesidad para poder mantener a la familia, a los hijos, a las personas que dependen de ellas económicamente; y también porque encuentran mejores condiciones económicas; lo cual difícilmente podría lograr en otra empleabilidad. Para quienes laboran en esta actividad de manera obligada, las cuales son un 40%, señalaron que existen organizaciones internacionales bajo las cuales ellas se movilizan dentro de Latinoamérica; en muchos ingresaron porque las compraron; incluso a sus parejas las introdujeron en el negocio; sin embargo declaran también que hay una edad en la cual todo termina ya que este negocio de clubes de prostitución está plagado de jóvenes; las mujeres que ya cumplieron su ciclo son desechadas y apartadas del negocio ya que no son rentables. Incluso pertenecer a este tipo de entidad les ayuda a proveer un aporte económico a sus familias, en algunos casos.

Tabla 4. ¿Bajo qué condición se dedican a esta actividad?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Voluntad propia	12	60%
Obligadas	8	40%
TOTAL	20	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfica 3. ¿Bajo qué condición se dedican a esta actividad?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

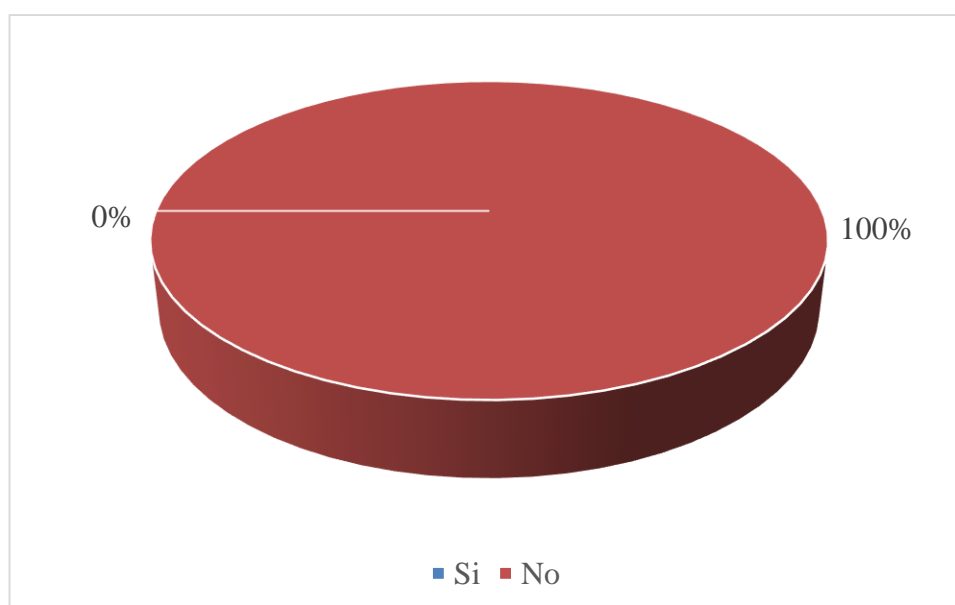
A la pregunta: ¿si estaría dispuesta a denunciar los casos de explotación sexual? El 100% señaló que no lo haría. Las razones que manifiestan es que en este negocio si realizan esas denuncias podrían pagar muy caro las consecuencias; incluso con sus vidas o las de sus familias; es mejor permanecer calladas y tratar de solucionar el problema ellas mismas; incluso no se puede confiar ni en la policía; ya que detrás de este negocio existen redes de organizaciones criminales mucho más poderosas, por tanto, realizar esa condición de denuncia les podría acarrear la muerte.

Tabla 5. ¿Estaría dispuesta a denunciar algún caso sobre explotación?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	0	0%
No	20	100%
TOTAL	20	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 4. ¿Estaría dispuesta a denunciar algún caso sobre explotación?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Se preguntó también si considera que la prostitución debe de reconocerse como un trabajo social; tal como sucede en algunos países de Europa; a lo cual el 100% respondió que sí; ya que incluso ayudaría a disminuir la criminalidad de las bandas; lo cual también posibilitaría el hecho de poder acceder a mejores condiciones sociales; pero consideran que por ahora es una utopía; dada la doble moral que existe en Latinoamérica. Desde la óptica

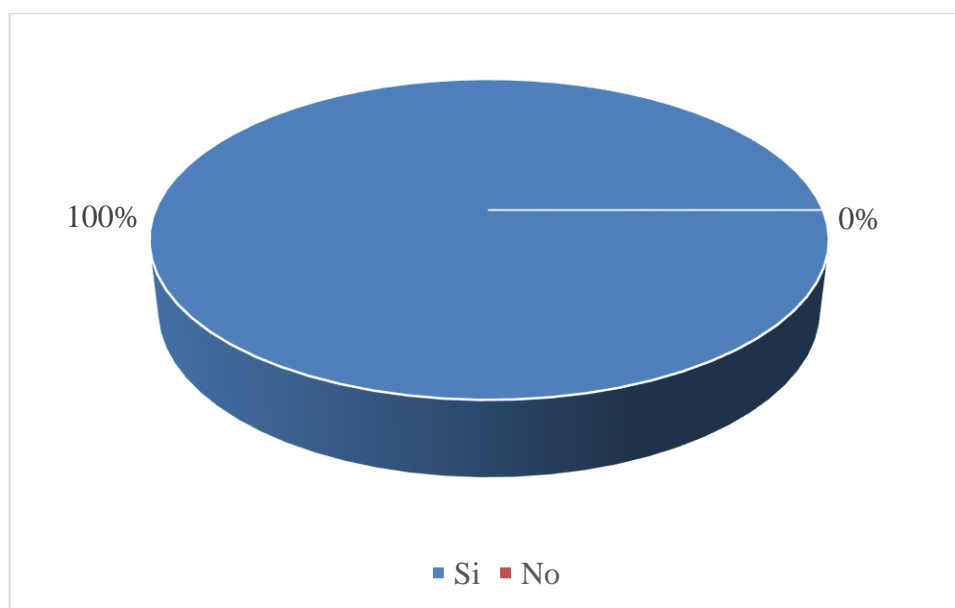
de estas mujeres consideran que la prostitución difícilmente desaparecerá, ya que se encuentra muy arraigada en la sociedad desde las esferas sociales más altas hasta las más bajas. Por ello la prostitución es “la profesión más antigua de la humanidad”; difícilmente cambiara eso. Tal vez una solución a futuro es poder establecer las denominadas zonas rosas; lo cual podría ser un paliativo, tal como ocurre en otros países.

Tabla 6. ¿Considera que la prostitución debe de reconocerse como un trabajo social?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	20	100%
No	0	0%
TOTAL	20	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 5. ¿Considera que la prostitución debe de reconocerse como un trabajo social?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Un segundo instrumento estuvo dirigido a recoger la opinión de los operadores del derecho que laboran en el poder judicial, ministerio público y la Unidad de lucha contra la trata de personas y su forma de explotación por parte de la PNP; es así que la primera pregunta fue: ¿si la institución tiene registradas denuncias sobre el delito de trata de personas? El 60% de los profesionales encuestados señalo que si existen denuncias; y el 40% restante considera que no. En relación a estas respuestas se enfatiza que lamentablemente son muy pocas las acciones que se pueden realizar debido a que muchas veces la victima retrocede ante la denuncia formulada y no concretiza por temor de cómo le podría ir más

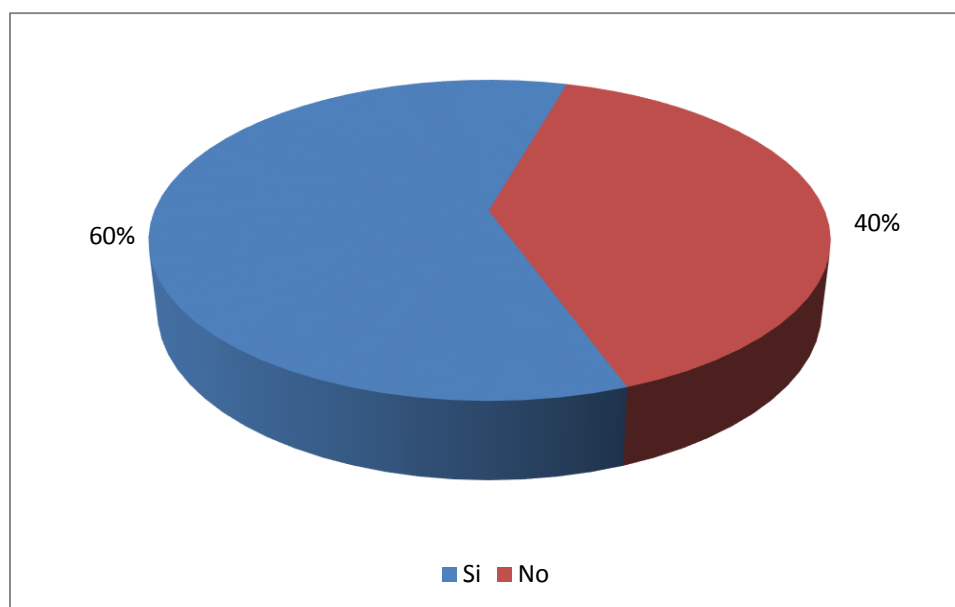
adelante, ya que temen por sus vidas; incluso muchas de estas mujeres que han denunciado son mutiladas o salvajemente golpeadas con la finalidad de generar miedo y no puedan declarar.

Tabla 7. ¿La institución tiene registradas denuncias sobre el delito de trata de personas?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	18	60%
No	12	40%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 6. ¿La institución tiene registradas denuncias sobre el delito de trata de personas?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

A la pregunta: ¿considera que el término: “consentimiento de la víctima adulta” debe ser suprimido de la definición del delito de trata de personas? El 80% de los abogados entrevistados considera que sí; mientras que el 20% considera que no. Los que están a favor argumentan que al eliminar esta condición los proxenetas no tendrían argucias legales para pedir la exoneración por la comisión del delito de trata de personas; así mismo, continuar defendiendo el consentimiento de la víctima implica la vulneración de la dignidad humana; ya que no existe justificación para implantar un modo de esclavitud de esta naturaleza. Quienes consideran que no indican que se debe de excluir dicho término, para ello argumentan que si la persona decide ejercer la prostitución es parte de su problema personal;

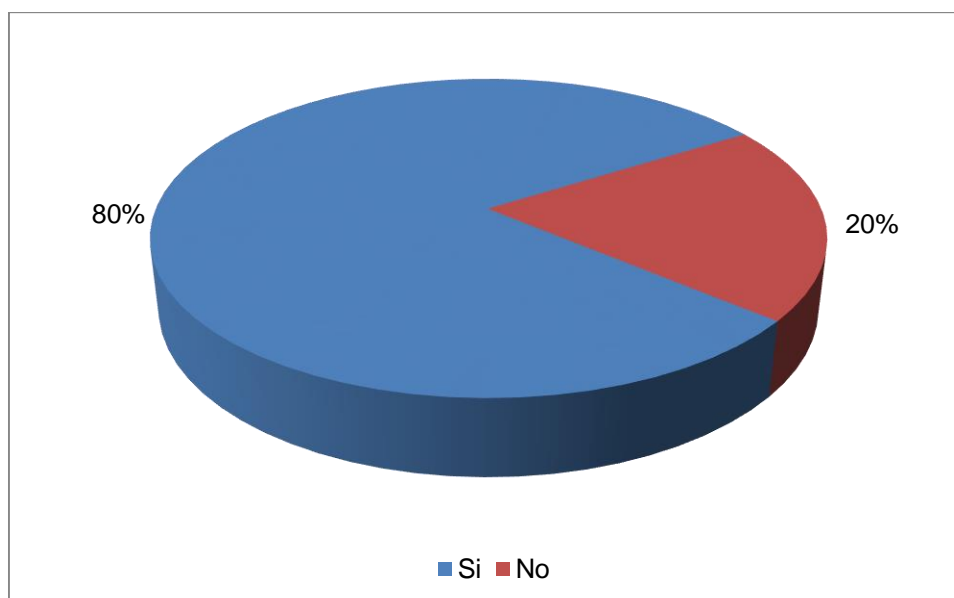
ya que cada persona tiene la responsabilidad de desarrollar su vida, bajo el sentido que cada quien decide seguir.

Tabla 8. ¿Considera que el término: “consentimiento de la víctima adulta” debe ser suprimido de la definición del delito de trata de personas?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	24	80%
No	6	20%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 7. ¿Considera que el término: “consentimiento de la víctima adulta” debe ser suprimido de la definición del delito de trata de personas?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

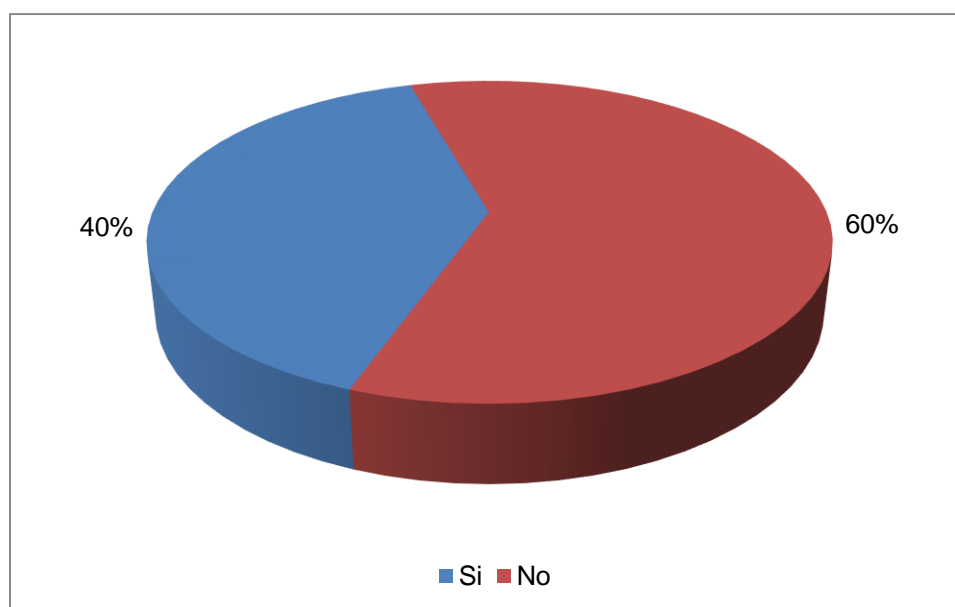
Se preguntó también si ¿las instituciones gubernamentales cuentan con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas? El 40% de los encuestados señala que el Estado Peruano si tiene la capacidad de poder desarrollar servicios logísticos para poder brindar protección a las víctimas del delito de trata de personas; mientras que el 60% restante considera lo contrario. En conclusión, podemos observar que en el Estado Peruano existen un sin número de problemas que difícilmente son atendidos satisfactoriamente; los problemas del país son varios y están asociados a la inseguridad ciudadana y a la criminalidad, lo cual hace más difícil su erradicación

Tabla 9. ¿Las instituciones gubernamentales cuentan con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	12	40%
No	18	60%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 8. ¿Las instituciones gubernamentales cuentan con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

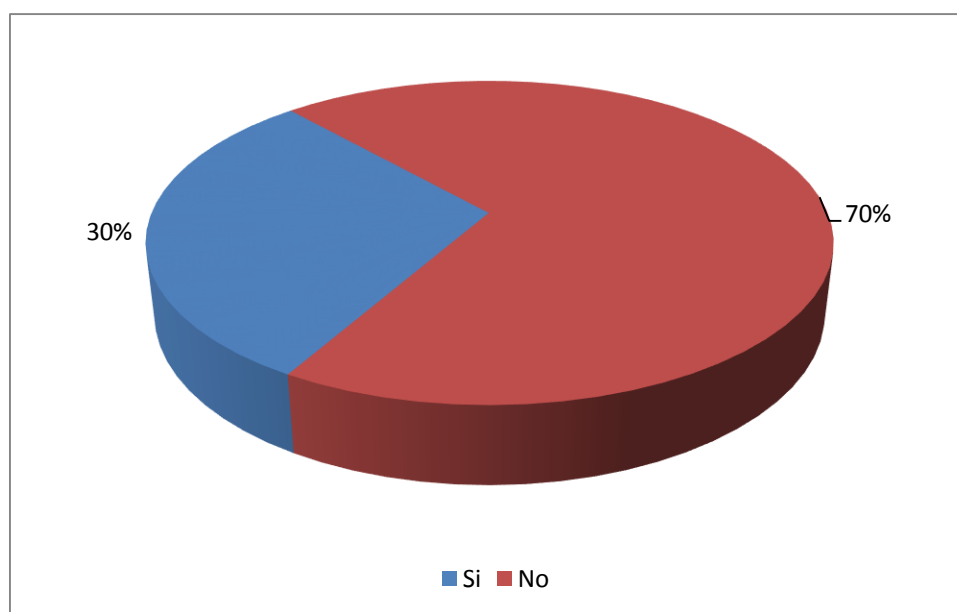
Por último, se preguntó sobre si: ¿existe algún protocolo a seguir para las personas rescatadas por el delito de trata de personas asegurando su seguridad y condiciones de vida? El 30% de los profesionales entrevistados señalaron que sí; que existen procedimientos a seguir con el fin de proteger la seguridad de la víctima y mejorar sus condiciones de vida. Mientras que el 70% manifestó que no; el Estado Peruano no tiene la capacidad para poder ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas que son rescatadas del delito de trata de personas; por lo cual muchas veces estas personas vuelven a reincidir en el delito y son captadas nuevamente para volver a ejercer el meretrício.

Tabla 10. ¿Existe algún protocolo a seguir para las personas rescatadas por el delito de trata de personas asegurando su seguridad y condiciones de vida?

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	9	30%
No	21	70%
TOTAL	30	100%

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Gráfico 9. ¿Existe algún protocolo a seguir para las personas rescatadas por el delito de trata de personas asegurando su seguridad y condiciones de vida?



Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

IV. DISCUSIÓN

Después de analizar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, se hace necesario la elaboración de un nuevo tipo penal que regule el delito de trata de personas en nuestro país; situación que podría definirse por medio de una posible adecuación penal; que debe de puntualizar la estructura de una nueva forma de delito que brinde realmente eficacia en la lucha contra la trata de personas y combata de forma enérgica la asistencia y el financiamiento internacional de bandas delictivas.

En el caso de una adecuación constitucional, existe la necesidad de poder estructurar el tipo penal referido a la trata de personas a la normatividad de orden constitucional en lo referente a los derechos humanos; ya que nuestro país integra los tratados en materia de derechos humanos; ello también sería necesario debido a que la ley penal parte de la interpretación de la materia constitucional; por ello la aplicabilidad de los principios y normas sobre derechos humanos deberán estar avocados a la prevención del delito, el cual es de pleno reconocimiento en el ordenamiento internacional del derecho: Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos; teniendo como punto de partida la jurisprudencia de los magistrados internacionales cuyo mando es aceptado por nuestro Estado; tal como se estipula en el artículo quinto del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia, desarrollada por el intérprete máximo de nuestra Carta Magna que es el Tribunal Constitucional.

La nueva estructuración del delito, implicaría la eliminación en el concepto de trata de personas del denominado consentimiento de la víctima mayor de edad; ya que de esta forma el nuevo ilícito penal se ordenaría con el sector antiguo doctrinal, el cual se basa en el enfoque de los derechos humanos; por lo cual considera que el consentimiento de la víctima constituye un irrelevante factor en la conceptualización del ilícito de trata de personas, ya que la dignidad humana no constituye un bien de carácter jurídico utilizable. Por ello el denominado Protocolo de Palermo que combate el delito de Trata de Personas es establecido por medio de un consentimiento, el cual es otorgado por la presunta víctima del ilícito, condición que no se encuentra prevista; por lo que es importante que para poder obtenerlo muchas veces se recurre a medios disuasivos como la amenaza y el uso de la fuerza; así como también el engaño y el fraude; sumándose a ello también el abuso de poder y la vulneración de las personas; recepción de beneficios y pagos; por lo cual es una condición que propicia el desarrollo de mayores problemas.

Asimismo, la eficacia en la lucha en contra de la trata de personas es crucial; por lo cual se deben de adoptar medidas de tipo penal en las cuales se deseche la premisa del consentimiento de la víctima como un indicador legal asociado a la exoneración de toda responsabilidad penal; situación que permitiría poder desarrollar una herramienta de mayor eficacia, desde la perspectiva de la prevención, protegiendo por sobre todo a la víctima y sancionando de manera efectiva a los autores de los ilícitos de esclavitud sexual o trata de personas, por comercializar servicios sexuales.

Por ello el Ministerio Público tiene la responsabilidad de acopiarse de las pruebas en donde se demuestre la falta incurrida; ya que siempre ha resultado muy complicado el poder demostrar que la cooperación o el consentimiento de la víctima de trata queda inválido por el uso de los medios que se describen en el tipo penal. En el contexto práctico los procesos penales se han visto obstaculizados en cuanto al poder demostrar el denominado consentimiento de la víctima. Por otra parte, la vulnerabilidad de la víctima es un tema que demanda también un estudio para poder contribuir en el desarrollo del caso; ya que esta situación puede contribuir de manera favorable en algunos escenarios jurídicos; como también puede aportar imprecisiones que no se podrán calificar dentro del desarrollo del contexto de la prueba en el proceso penal.

De acuerdo a un estudio realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), en nuestro país el Poder Judicial no posee información consolidada y actualizada sobre todos los casos que han sido judicializados sobre este delito de trata de personas. UNODC, ha elaborado algunas estadísticas al respecto, como por ejemplo en el año 2018; a nivel nacional se tuvieron un promedio de 75 casos de procesos instaurados en mención al delito; cifra que, si la comparamos con años anteriores como en el año 2017, sobre el cual se tiene una estadística de 69; y durante el año 2016; se presentaron 64 procesos. Como se observa los resultados no guardan grandes diferencias; es más podemos catalogarlos como muy similares.

Con relación al financiamiento y asistencia internacional en relación al ilícito penal, tenemos que es necesario que nuestro país asuma una posición más contundente en la lucha contra este flagelo; ya que el poder judicial no tiene la debida eficacia a nivel de la judicialización de los casos que resuelve; la sanción sobre este ilícito penal no genera un gran impacto en la sociedad; más podríamos hasta calificar que tiene un impacto aceptable de permisivo; es decir es aceptado por la sociedad; sin mayores muestras de rechazo. El Perú

por medio de su organización estatal, y en especial en el Poder Judicial, no se cuenta con un efecto positivo en relación a la asistencia y financiamiento internacional; ya que continuamente ingresan personas al país; para luego dedicarse a la prostitución; tal como sucede en la ciudad de Piura con las mujeres ecuatorianas, venezolanas y colombianas que llegan a la ciudad y terminan brindando servicios sexuales.

De acuerdo a la Ley de Protección de Víctimas de Trata de los Estados Unidos de América (TVPA); los Estados calificados en el tercer nivel tal como se refiere en el Informe Anual sobre el delito de trata de personas a nivel del mundo, elaborado por el Departamento de Estado, se señala que esta situación podría depender de diversas sanciones que serían aplicables en materia asistencial bilateral; bajo cuya acción Estados Unidos podrá retener o retirar; parcialmente la asistencia no humana y la no relación con el comercio. Incluso países calificados en un nivel 3 sobre este problema de trata de personas no recibirá ayuda ni financiamiento por parte de los organismos internacionales para el desarrollo de programas educativos y culturales.

Nuestro país se encuentra calificado en un nivel 2; lo cual significa que es un Estado, en cuyo gobierno, no se cumple de manera plena las mínimas normas para erradicar la trata de personas; pero se encuentra realizando acciones y esfuerzos para poder cumplirlas. El nivel 1 corresponde a los países donde se cumplen las normas de manera plena y el nivel 3 de esta calificación son los Estados donde no se cumplen las normas y no hay esfuerzo por mejorar. En el Perú existe aún un gran número de víctimas de trata de personas o en su defecto el problema puede aumentar de forma considerable; sumándose a ello que no hay evidencia concreta sobre el desarrollo de acciones para poder hacer frente a la ocurrencia de este delito; ya que los números de los casos judicializados se mantienen en promedio en los últimos tres años; tal como ya se ha señalado. Por tanto, el sistema judicial debe de contemplar una mayor asignación de recursos para poder realizar las investigaciones pertinentes: enjuiciamientos y sanciones efectivas por la comisión de este delito; disponiendo también la asistencia a las víctimas y el cumplimiento de la normatividad de manera efectiva.

La propuesta que establece la presente investigación para una posible solución al problema se enmarca en dos aspectos; por una parte incluir el delito de trata de personas en un apartado autónomo en el Código Penal Peruano; siguiendo los lineamientos para tal fin; como el protocolo para poder realizar la prevención; la represión y otorgar la sanción o

castigo sobre este ilícito; con especial atención a niños y mujeres; lo cual tiene sustento normativo y jurídico en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y también la propuesta implica que dentro de este tipo penal se debe de eliminar los términos siguientes: “el consentimiento de la persona mayor de edad”, como causa de exoneración de la tipicidad en la ejecución y desarrollo del ilícito sobre trata de personas; siguiendo el avance que se tiene en otros Estados americanos como en el caso del Código Penal de la República de Colombia. Enfatizar que el consentimiento otorgado por la víctima de cualquier forma de explotación sexual no constituye una causal para poder exonerar de responsabilidad penal a quien incurre en tal delito. De esta manera el actor del delito ya no podrá ampararse en dicho consentimiento de la víctima para disminuir o excluir su pena.

La modificación a la cual se hace referencia contribuirá de manera efectiva en la lucha contra la trata de personas; ya que no existirá un factor de exoneración penal; lo cual a su vez permitiría al Estado Peruano contar con herramientas legales de mayor eficacia para poder hacer frente a este problema, apostando por la prevención y la protección de la víctima en todos sus aspectos. A su vez, de manera directa, se debe imponer la sanción penal a quienes incurren en este delito.

Por último, en el Informe Mundial emitido sobre el delito de Trata de Personas que corresponde al año 2016; cuyo autor es el Gobierno Norteamericano; precisa que el sistema judicial del Perú se encuentra atravesando por serias deficiencias en lo que corresponde a los procesos asociados a la trata laboral y también sexual. De acuerdo al Informe, se tiene que los magistrados restan relevancia a los casos presentados sobre la trata de personas; incluso los califican como favorecimiento al ejercicio y desarrollo de la prostitución y con mucha incidencia no logran condenar de manera directa a los tratantes por falta de pruebas del delito.

V. CONCLUSIONES

1. De acuerdo a lo que se establece en el concepto del delito de trata de personas en relación al consentimiento de la víctima mayor de edad; lo cual es causal para eximir la responsabilidad penal; en la comisión de este delito de acuerdo a nuestro actual Código Penal, esta condición no es sólida en concordancia con la protección del bien jurídico como es la dignidad humana. Por lo tanto, la dignidad humana no constituye un bien jurídico utilizable; lo cual está expresado tanto en el marco del Derecho Constitucional, el Derecho Internacional y también expresamente definido en el Derecho Penal.
2. El delito de trata de personas es de suma gravedad; incluso constituye un crimen que puede ser equiparable a uno de lesa humanidad. Por lo cual es un tipo de esclavitud, cuyo objetivo es la explotación de las personas, sobre el cual se han definido varias convenciones que analizan este tema. Por lo cual el Código Penal Peruano debe de analizar tres condiciones: primero la excepción (consentimiento de la víctima); segundo cuando la víctima es un menor de edad con especial atención en un niño o niña; y por último, tercero, cuando el elemento que se define en el denominado “medio” no forma parte de la conceptualización.
3. El bien jurídico que lesiona el delito de trata de personas es la dignidad humana; el cual tiene como característica ser un bien jurídico no disponible; razón por la cual no debe de tomarse como argumento de exoneración del delito el llamado consentimiento de la víctima, sea esta mayor de edad o menor de edad; aduciendo que es una atenuante favorable de tipicidad o antijuricidad.
4. Se concluye que es necesaria la modificación del Código Penal Peruano; en contenido de sus artículos 153° y 153° - A; suprimiendo el término: “consentimiento de la víctima adulta”, como causal de atenuante de la tipicidad en la comisión del delito de trata de personas. Asimismo, podría consignarse que la norma debe sancionar de forma igualitaria al individuo que convenga publicidad por cualquiera de los medios de comunicación, tan igual como a la persona que publicite anuncios que favorezcan el desarrollo del ilícito en referencia a la trata de personas.

VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los términos “consentimiento de la víctima mayor de edad” deben ser tachados de la normatividad; ya que se debe de actuar frente a este delito desde el ámbito que brinda el Derecho Constitucional; el cual sustenta la definición de la dignidad humana como un referente del fin primordial de toda sociedad; la cual es reconocida por nuestro ordenamiento constitucional en su artículo primero.
2. Se recomienda también, en esta condición a la cual hacemos referencia, que el estudio desarrollado sea abordada por el derecho internacional; ya que se encuentra referido a la concepción del *ius cogens*, o también denominada norma imperativa del derecho internacional; bajo el cual se analizan los derechos humanos, y con especial atención aquellos que guardan vínculo con la dignidad y la integridad, tanto física como psicológica, de las personas.
3. Se recomienda también que la explotación en la cual se incurre en el delito de trata de personas sea vista desde una perspectiva de esclavitud; sobre la cual podemos decir que el sujeto es considerado como una extensión del dominio; y por lo tanto, el derecho penal debe de atender de forma contundente la sanción del delito.
4. Por último, se recomienda que el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario deben de tomar cartas en el asunto para analizar y sancionar la gravedad del delito de trata de personas; considerarlo como un crimen de lesa humanidad; incorporándolo desde esta perspectiva al Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional.

REFERENCIAS

- Arias-Gómez, J.; Villasís, M. y Miranda, M. (2016). El protocolo de investigación III: La población de estudio. *Revista Alergia México*, 62 (2), 201-206.
- Atienza, M. (2004). *Las razones del Derecho, teorías de la Argumentación Jurídica*. Lima: Editorial Palestra.
- Avalos, C. C. y Robles, M. E. (2016). *El sistema penal peruano según el Tribunal Constitucional*. Tomo I. Lima. Gaceta Jurídica. Primera edición.
- Carballo, M., & Guelmes, Valdés, E. (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. *Revista Universidad y Sociedad*, 8 (1), 140 – 150. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100021
- Centro De Asesoría Legal Del Perú, (2017). *Derechos Humanos de las y los peruanos en el exterior*. Lima, diciembre.
- Chirinos, F. (2013). *Código Penal. Comentado, concordado, Jurisprudencia*. Editorial Rhodas S.A.C. Sexta edición. Marzo. Lima, Perú.
- Espinoza, E. (2018). Las variables y su operacionalización en la investigación educativa, parte I. *Revista Conrado*, 14(65), 39 – 49. Recuperado de: <http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado>
- Gaceta Jurídica (2017). *El Código Penal en su jurisprudencia. Sentencias vinculadas con los artículos y figuras jurídicas del Código Penal*. Primera edición. Mayo 2007. Lima, Perú.
- Gamboa, F. (2015). *Manual de Derecho Internacional Público*. Serazzi (2a ed.). Universidad de Chile.
- García, V. (2015). *Derechos fundamentales* (2a ed.). Editorial Adrus. Impreso en el Perú.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*, México: Interamericana Editores.

- Huerta, C. (2017). Interpretación y argumentación en el Derecho. *Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM*, (11), 379-416
- Loayza, C. (2014). El derecho internacional general en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Las normas de ius cogens. En *Ius et praxis*. Revista de la Facultad de Derecho. Universidad de Lima. Fondo Editorial. Número 45. Impreso en el Perú.
- Matus, J. (2017). La política criminal de los tratados internacionales. En *Derecho Penal Contemporáneo*. Revista internacional. Bogotá, Colombia.
- Medina, N. (2014). Las variables complejas en investigaciones pedagógicas. *Revista Apuntes Universitarios*, 5 (2), 9 – 18. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5198870.pdf>
- Meza, E. (2006). Argumentación e interpretación jurídica. *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, (267), 91 – 113. Recuperado de: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/32160>.
- Morillo, Z. (2016). El delito de trata de personas y la problemática del consentimiento de la víctima. En *Episteme XXI*. Revista de investigación científica. Academia de Magísteres y doctores del Perú. Chiclayo, Perú.
- Naciones Unidas. Oficina de las Drogas y el Delito (2018). El estado de la trata de personas en el Perú. Impresiones Mix Negociaciones S.A.C. Lima, Perú.
- Niño, V. (2011). Metodología de la investigación. Bogotá: Ediciones de la Universidad.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2017). Las Convenciones contra la Delincuencia Transnacional Organizada y la Corrupción. Lima.
- Organización de Estados Americanos (2017): Departamento de Seguridad Pública. Página Institucional. Recuperado de: http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_trata.asp
- Parra, O. (s.f.). La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra la impunidad. Algunos avances y debates. Recuperado de: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30797.pdf>.

- Ribas, A. (2016). La protección a las víctimas de trata de personas en Brasil. *Revista Opinión Jurídica Universidad de Medellín*. Volumen 15. Número 29.
- Salmón, E. (2011). De la competencia *ratione materiae* prevista en el Estatuto de Roma. En Salmón Elizabeth (Coordinadora): *La Corte Penal Internacional y las medidas para su implementación en el Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 2001.
- Sanca, T. (2011). Tipos de investigación científica. *Revista de actualización clínica investiga*, 12, 621 – 624. Recuperado de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-37682011000900011&script=sci_arttext
- Ventura, J. (2017). ¿Población o muestra?: Una diferencia necesaria. *Revista Cubana de Salud Pública*, 43 (4), 5 – 13. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000400014

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA

Tabla 11. matriz de consistencia lógica

PROBLEMA	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES
¿El consentimiento de la víctima mayor de edad en el caso de las mujeres migrantes en el país es considerado causal de exoneración de la responsabilidad penal en el delito de trata de personas en concordancia a lo que establece el Código Penal Peruano?	El consentimiento de la víctima mayor de edad migrantes es causa de exoneración de la responsabilidad penal en el tipo penal de trata de personas del Código Penal Peruano; condición que no es consistente con el carácter de bien jurídico no disponible de la dignidad humana, el cual es el bien jurídico tutelado en el delito de trata de personas.	<p>General:</p> <p>Establecer si el consentimiento de la víctima mayor de edad migrante es causa de exoneración de la responsabilidad penal en el tipo penal de trata de personas dentro del Código Pernal Peruano, el cual es consistente con el carácter de bien jurídico no disponible de la dignidad humana, bien jurídico tutelado en el delito de trata de personas.</p> <p>Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer si la dignidad humana es un bien jurídico disponible, a la luz del Derecho Constitucional. 2. Establecer si la dignidad humana es un bien jurídico disponible, a la luz de las normas del ius cogens del Derecho Internacional. 3. Establecer si la trata de personas en mujeres migrantes es una modalidad de la esclavitud, teniendo en cuenta los fines de explotación del delito de trata de personas, vinculados a las características esenciales de la esclavitud. 4. Determinar si la trata de personas en mujeres migrantes es un delito grave, que bajo ciertas circunstancias puede llegar a constituir un crimen de lesa humanidad. 	<p>Variable independiente:</p> <p>Consentimiento de la víctima mayor de edad</p> <p>Variable dependiente</p> <p>Delito de trata de personas.</p>

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA

Tabla 12. Matriz de consistencia metodológica

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	POBLACIÓN Y MUESTRA	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
Descriptiva explicativa Diseño Experimental No	Operadores del derecho Mujeres dedicadas al meretricio	Expedientes judiciales. Encuestas y entrevistas	Validación por consulta de expertos.

Fuente: Elaborado por Joseph Jimmynton Fiestas Alache

Validación de instrumentos



CONSTANCIA DE VALIDACION

Yo, Cristian Jurado Fernández con DNI N° 17614452
 registrado con código N° ANR 17614452 de profesión Abogado
 desempeñándome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad
César Vallejo Fichal Piura; por medio de la presente hago
 constar que he revisado con fines de validación los instrumentos que se aplicaran en el
 proceso de investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
 apreciaciones.

ENTREVISTA DE OPERADORES DEL DERECHO	DEFICIENT E	ACEPTABL E	BUENO	MUY BUENO	EXCELENT E
1. Claridad					X
2. Objetividad					X
3. Actualidad				X	
4. Organización				X	
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia					X
8. Coherencia					X
9. Metodología					X

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 10 de
Mayo del 2020.

Apellidos y Nombres : Jurado Fernández Cristian
 DNI : 17614452
 Especialidad : Gestión Universitaria
 E-mail : crisjufer2@gmail.com


 Dr. Cristian A. Jurado Fernández
 CPPe. N° Reg. 1617614492

FICHA DE VALIDACIÓN

TEMA DE TESIS: "DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EL CONSENTIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS EN MUJERES MIGRANTES"

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
ASPECTOS DE VALIDACION		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																			X		
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables																			X		
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																		X			
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																		X			
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.																			X		

CONSTANCIA DE VALIDACION

Yo, Omar Gabriel Velasco Palacios con DNI N° 05641721
registrado con código N° ANR 05641721 de profesión Abogado
desempeñándome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad
Cesar Vallejo Piura; por medio de la presente hago
constar que he revisado con fines de validación los instrumentos que se aplicaran en el
proceso de investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.

ENTREVISTA DE OPERADORES DEL DERECHO	DEFICIENT E	ACEPTABL E	BUENO	MUY BUENO	EXCELENT E
1. Claridad				X	
2. Objetividad					X
3. Actualidad					X
4. Organización				X	
5. Suficiencia					X
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia				X	
8. Coherencia					X
9. Metodología				X	

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 12 de
Mayo del 2020.

Apellidos y Nombres : Velasco Palacios, Omar Gabriel.

DNI : 05641721

Especialidad : Derecho Civil y Comercial.

E-mail : Ovelasco@ucv.edu.pe.



Mg. Omar Gabriel Velasco Palacios
ABOGADO
JEFE

FICHA DE VALIDACIÓN

TEMA DE TESIS: “DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EL CONSENTIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS EN MUJERES MIGRANTES”

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																				X	
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables																		X			
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																		X			
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems																				X	
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.																				X	

CONSTANCIA DE VALIDACION

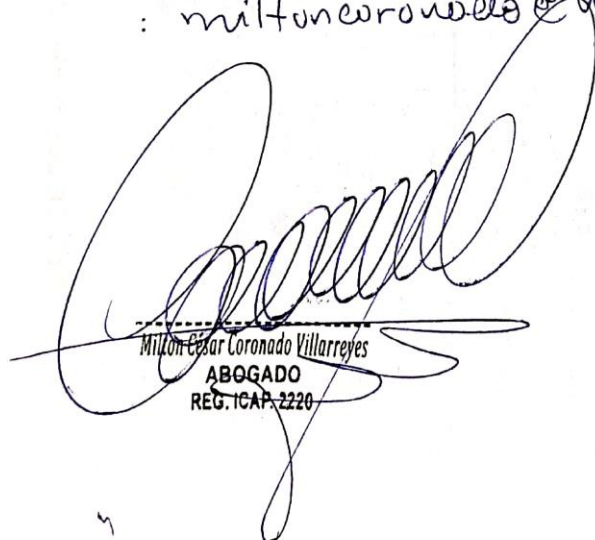
Yo, Milton César Coronado Villarreyes con DNI N° 41359069
registrado con código N° ANR _____ de profesión abogado
desempeñándome actualmente como Docente Universitario; en la Universidad
César Vallejo - Piura; por medio de la presente hago
constar que he revisado con fines de validación los instrumentos los cuales se aplicaran
en el proceso de investigación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.

ENTREVISTA DE OPERADORES DEL DERECHO	DEFICIENT E	ACEPTABL E	BUENO	MUY BUENO	EXCELENT E
1. Claridad					X
2. Objetividad				X	
3. Actualidad					X
4. Organización				X	
5. Suficiencia				X	
6. Intencionalidad					X
7. Consistencia				X	
8. Coherencia				X	
9. Metodología				X	

En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura 15 de
mayo del 2020.

Apellidos y Nombres : Coronado Villarreyes Milton César
DNI : 41359069
Especialidad : Derecho Constitucional
E-mail : miltuncoronado@hotmail.com



Milton César Coronado Villarreyes
ABOGADO
REG. ICAP. 2220

FICHA DE VALIDACIÓN
**TEMA DE TESIS: “DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y EL CONSENTIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS EN MUJERES
MIGRANTES”**

Indicadores	Criterios	Deficiente 0 – 20				Regular 21 – 40				Buena 41 – 60				Muy Buena 61 – 80				Excelente 81 – 100				OBSERVAC.
ASPECTOS DE VALIDACION		0	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1.Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado																		X			
2.Objetividad	Esta expresado en conductas observables															X						
3.Actualidad	Adecuado al enfoque teórico abordado en la investigación																		X			
4.Organización	Existe una organización lógica entre sus ítems															X						
5.Suficiencia	Comprende los aspectos necesarios en cantidad y calidad.															X						

Instrumentos de recolección de datos
ENCUESTA APLICADA A LAS MUJERES MIGRANTES

INDICACIONES.

A continuación, se presentan una serie de preguntas que solicitamos responda, ya que sus respuestas nos ayudaran a tener una visión más precisa del problema que nos encontramos investigando. Los resultados de esta intervención servirán para sistematizarlos en una investigación jurídica titulada: “Delito de trata de personas y el consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes”. Gracias por su tiempo y colaboración.

=====

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad del meretrício?

- ☐ De 1 a 2 años
- ☐ De 2 a 4 años
- ☐ De 3 a 5 años
- ☐ De 5 años a más

2. ¿Para quién destina el dinero que recibe por sus servicios?

- ☐ Mi familia
- ☐ Mis hijos
- ☐ Para mí misma
- ☐ Para mi pareja

3. ¿Tiene familiares en el país?

- ☐ Si
- ☐ No

4. ¿Estaría dispuesta a denunciar algún caso sobre explotación?

- ☐ Si
- ☐ No

5. ¿Tiene familia a su cargo?

- ☐ Si
- ☐ No

6. ¿Sabe su familia como obtiene sus ingresos?

- ☐ Si
- ☐ No

7. ¿Está en esta condición laboral por su voluntad?

- ☐ Si
- ☐ No

!!!Gracias por su tiempo y participación!!!

**ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y A
REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO**

INDICACIONES.

A continuación, se presentan una serie de preguntas que solicitamos responda, ya que sus respuestas nos ayudaran a tener una visión más precisa del problema que nos encontramos investigando. Los resultados de esta intervención servirán para sistematizarlos en una investigación jurídica titulada: “Delito de trata de personas y el consentimiento de las víctimas en mujeres migrantes”. Gracias por su tiempo y colaboración.

=====

1. ¿La institución maneja denuncias sobre trata de personas?

☐ Si

☐ No

2. ¿La institución cuenta con una red de información sobre el problema de trata de personas?

☐ Si

☐ No

3. ¿Cuántos casos de trata de personas han sido identificados por la institución?

4. ¿Qué acciones se están desarrollando al respecto?

5. ¿La institución ha recibido capacitación para poder atender estos casos en concreto?

6. ¿Se cuenta con los servicios logísticos para atender a las presuntas víctimas de trata de personas?

7. ¿La institución desarrolla acciones preventivas para evitar y combatir estos casos?

8. ¿La entidad trabaja en forma paralela con alguna ONG para poder atender esta problemática de trata de personas, en especial de inmigrantes venezolanas?

9. ¿Qué acciones sugiere que se deben de realizar para poder combatir este problema?

10. ¿Existe algún protocolo de seguimiento para las personas que son rescatadas producto del delito de trata de personas de manera posterior para asegurar su seguridad y condiciones de vida?

¡¡¡Gracias por su tiempo!!!